

V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

ACESSO À JUSTIÇA

JOSÉ QUERINO TAVARES NETO

HENRY JAVIER TRUJILLO AROCENA

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:

Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches – UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)

Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF

Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDI

Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC

Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA

Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

A174

Acesso à Justiça [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UdelaR/Unisinos/URI/UFSC/Univali/UPF/FURG;

Coordenadores: Henry Javier Trujillo Arocena, José Querino Tavares Neto – Florianópolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-215-6

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Instituciones y desarrollo en la hora actual de América Latina.

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Internacionais. 2. Justiça. I. Encontro Internacional do CONPEDI (5. : 2016 : Montevideu, URU).

CDU: 34



Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br



Universidad de la República
Montevideo – Uruguay
www.fder.edu.uy

V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

ACESSO À JUSTIÇA

Apresentação

En las presentaciones realizadas se puede ver análisis que recorren distintos niveles de temas dentro del concepto de acceso a la justicia. De manera general, se pueden distinguir cuatro aspectos que han motivado el trabajo de los ponentes. Un aspecto que se podría llamar “procesal” refiere a los institutos procesales disponibles dentro del Poder Judicial y dentro del sistema institucional como un todo. Básicamente, éstos refieren a diferentes tipos: los mecanismos alternativos tales como el arbitraje, conciliación y mediación; los juzgados especiales, y los institutos de acción colectiva o de público interés. Quienes expusieron sobre estos temas estaban preocupados sobre todo por la eficiencia y eficacia de estos instrumentos procesales, particularmente los primeros –la mayoría de los trabajos refirió a ellos- debido principalmente a la reciente entrada en vigencia del Código del Proceso Civil en Brasil (CPC) que ha incluido innovaciones en los procedimientos de conciliación y mediación, en busca de facilitar la entrada al sistema legal por parte, especialmente, de aquellas personas y grupos más vulnerables. Los mecanismos de autocomposición son vistos como una forma prometedora de enfrentar el crecimiento y complejidad de las demandas que enfrenta el Poder Judicial. En general, estos trabajos concluyen que estas herramientas son un avance, aunque todavía insuficientes.

Un segundo tipo lo constituyen las acciones colectivas, incluyendo acciones de masa. También aquí el CPC incluye innovaciones cuyo efecto se verá en el futuro, y también aquí quienes abordan el tema observan limitaciones en el diseño del instituto. El tercer tipo, dado por los juzgados especiales, ha sido objeto de un trabajo que también observa el funcionamiento de la Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), encontrando que ha adoptado formas novedosas de unificación de jurisprudencia y de generación de parámetros de actuación, facilitando soluciones más próximas a las necesidades de los justiciables y también más rápidas.

Más allá de los instrumentos procesales, un trabajo tomó en cuenta el papel de las Defensorías públicas como mecanismo de acceso a la justicia, especialmente para personas más vulnerables. Se encuentra que, a pesar de la existencia de recomendaciones internacionales sobre la necesidad de este mecanismo, y de que estas fueron incorporadas en

la Constitución, la implementación de la institución es deficiente en buena medida, teniendo cobertura solo en una fracción del territorio, y con problemas de funcionamiento en muchas partes.

De hecho, los problemas de calidad del diseño y la implementación de instrumentos procesales, y de los propios organismos con funciones en el acceso a la justicia, son observados reiteradamente por los ponentes. Se señala justamente que el acceso no puede reducirse solo a la admisión en el proceso, sino que incluye también el modo de ser del proceso, la justicia del resultado y su utilidad. Los distintos trabajos sugieren que la promulgación de disposiciones legales es un paso adelante, pero notoriamente insuficiente si no es acompañada de otros procesos de cambio. Todo esto lleva a complejizar el concepto de acceso a la justicia, complejización que refleja la de la sociedad que demanda ese acceso, que según ven varios de los ponentes se ha vuelto más diferenciada y múltiple.

En este sentido, un trabajo se apoya en la teoría de los juegos para aludir a la existencia de ciertas formas de cultura legal que tienden a identificar acceso a la justicia como acceso a un litigio que, en tanto conflicto, solo puede ser resuelto por adjudicación, aplicando la fuerza del Estado. En cambio, los modelos de autocomposición presuponen la posibilidad de comportamiento cooperativo, que resulta difícil de conciliar con el paradigma imperante.

Finalmente, dos trabajos se han referido a los temas planteados por los enfoques neo constitucionalistas. Uno de ellos analiza los dilemas distributivos que se plantean frente a la actuación del Poder Judicial en el acceso a medicamentos y servicios médicos de alto costo, proponiendo la aplicación de la teoría de la justicia de Rawls como forma de decidir la asignación de recursos escasos frente a la judicialización de estas demandas. El otro trabajo explora la inobservancia de disposiciones positivas, especialmente de la audiencia preliminar, desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli.

De hecho, el GT propuesto Acceso a la Justicia afirma cada vez más como un espacio de discusión no sólo de acceso a los tribunales como una herramienta para producir la justicia, que no pocas veces produce exactamente lo contrario, pero, sobre todo, la construcción la ciudadanía y la necesidad de aumentar las oportunidades de acceso a los sistemas de justicia. Esto sólo será efectiva como cuando el monopolio de decir lo que es correcto para migrar a una mayor comprensión de lo que es correcto y por lo tanto no sólo ellos mismos tienen que cambiar las fuentes tradicionales del derecho, tales como, en particular, la expansión de los actores inherente a la toma de decisiones y constructivo proceso de su fuente más recurrente, la ley.

Montevid u

Prof. Dr. Henry Trujillo - UDELAR

Prof. Dr. Jos  Querino Tavares Neto - UFG/PUCPR

ACESSO À JUSTIÇA: ÊNFASE EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO BRASILEIRAS
ACCESO A LA JUSTICIA : ÉNFASIS EN MEDIACIÓN Y RECONCILIACIÓN
BRASILEÑA

Marcela Moreno Galdino Marques ¹

Resumo

Aborda o “acesso à justiça”, expondo sua crise, aspectos históricos e sociais, sua amplitude internacional, elencada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, capaz de motivar a reestruturação na administração da justiça e retomar institutos anteriormente indispensáveis, que são a mediação e a conciliação, ou seja, meios alternativos de resolução do conflito. A metodologia utilizada foi baseada em uma pesquisa descritiva, dedutiva, baseando-se em técnica documental proveniente de fontes primárias. Retrata a relevância social da implantação de Centrais de Mediação e Conciliação, instrumento de exercício da cidadania e de consolidação do Estado Democrático de Direito através da Resolução 125 do CNJ.

Palavras-chave: Acesso à justiça, Resolução 125 do cnj, Conciliação, Mediação

Abstract/Resumen/Résumé

Se aborda el " acceso a la justicia " , exponiendo su crisis , aspectos históricos y sociales , su alcance internacional , elencada por Mauro Cappelletti y Bryant Garth , capaz de motivar a la reestructuración de la administración de justicia y reanudar institutos previamente indispensables , que son la mediación y conciliación o medios alternativos de resolución de conflictos . La metodología utilizada se basa en un estudio descriptivo, deductivo. Retrata la relevancia social de la implementación de Centros de Mediación y Conciliación , a través de la Resolución 125 de la CNJ .

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Acceso a la justicia, Resolución 125 de la cnj, La reconciliación, Mediación

¹ Mestranda em História das Idéias Penais pela Faculdade Damas (Pernambuco)

1 INTRODUÇÃO

A ampliação do acesso à Justiça, por meio da Constituição Federal de 1988, embalou a geração de muitos processos. Consequentemente, de acordo com Cambi e Farinelli (2011, p. 278), a prestação jurisdicional começou a se ter como lenta e os cidadãos passaram a por em xeque o sistema jurisdicional.

Com o intuito de reverter esta situação, para alcançar a plenitude da cidadania garantida no Estado Democrático de Direito, várias foram as alternativas propostas, e, dentre essas, meios de solução de conflito alternativo, visando a descentralização da Justiça, por Mauro Cappelletti, explanando mutações procedimentais e administrativas necessárias para a concretização de tal direito. Foi neste contexto que ressurgiram a mediação e a conciliação.

Elas podem operar, pelos ensinamentos de Andrews (2011, p.282), como substituição ampla para o contencioso civil, nos casos cabíveis, ou pode ser acessório neste procedimento já iniciados ou em fase recursal. Desta forma, há a possibilidade da efetividade do direito de ação por terem se demonstrado eficazes na solução de problemas através de acordo, bloqueando, assim, a inicialização de novos processos ou extinguindo processos em trâmite.

A escolha do tema se justifica, logo, pela crise judiciária estatal e a incorporação de meios voluntários de pacificação multidisciplinar e reestruturação da comunicação

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a Mediação e Conciliação como forma de instrumento ao acesso efetivo à justiça, tendo como justificativa a necessidade de alteração da administração judiciária para possibilitar aos cidadãos um retorno célere e efetivo da prestação jurisdicional.

Para tanto, pretende-se esmiuçar os conceitos e características, tais como: informalidade, oralidade e agilidade nas decisões, além da legislação, cujo objetivo é dar maior operacionalidade judiciária, todos pertinentes ao tema. Tudo isto para embasar a inclusão da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Estado de Pernambuco, em que pese como está estruturado, métodos utilizados e suas seções.

Assim, a partir do estudo, poder-se-á constatar o êxito e limitações deste novo plano material de ideal de bem-estar social.

2 ACESSO À JUSTIÇA

O tema do acesso à justiça é aquele que mais diretamente equaciona as relações entre o processo civil e a justiça social, entre igualdade jurídico-formal e desigualdade sócio-econômica.

(Boaventura de Souza Santos)

A economia de mercado e fugacidade das relações comerciais pela interligação, compartilhamento de informações induziram novos anseios para a vida urbana, e, conseqüentemente, necessidade de acompanhamento pelo Direito, pelo que exploram Tesheiner e Viafore (2011, p. 27). Só que algo não mudou: é da essência humana a existência do conflito como relata Shakespeare em “Hamelet”, na conhecida expressão “*Tobeornottobe, that’s the question*”, podendo esse ser intrapessoal, interpessoal, intragrupal ou intergrupar, de acordo com Gonçalves da Silva (2006, p. 12). Ao juntar as transformações sociais e ampliação de relações com o embate inerente do ser humano, há, inegavelmente, o aumento da busca pelo Judiciário e sua hipertrofia crítica.

Inacessibilidade, morosidade e custo da Justiça são alguns dos fatores que põem em xeque o Judiciário brasileiro, necessitando-se, assim, de meios que consagrem a cessão da justiça privada (exercida pela força, pelo arbitramento, prova, jogo) para a estatal (quando o Estado tomou pra si o dizer o direito e aplicar a Justiça). Araken de Assis (apud Tesheiner e Viafore, 2011, p. 16) reitera o colocado ao explicar que, quando ficou proibida a pessoa resolver por si suas desavenças, o Estado tomou para si o apurar de conflitos sociais e precisa com presteza julgá-las.

Com o aperfeiçoamento da democracia e a ampliação da classe média, da informação e da educação, pelo que leciona Almeida (2000, p. 28), há uma maior demanda no sistema judiciário, ficando este lotado. Por isto, atualmente, a crise do Judiciário está em foco, sendo assunto a ser discutido tanto pela doutrina, ao formular alterações procedimentais, bem como por leis editadas para maior celeridade, visando, conseqüentemente, à satisfação do usuário pela prestação eficaz do seu direito, de acordo com Rio Alves (*site JFCE*). Conforme aponta Bezerra Cavalcanti (*site JUS NAVEGANDI*),

O Judiciário brasileiro debate-se em grave crise. Os problemas que o afligem, que dificultam, retardam e, na prática, muitas vezes, até impedem a prestação jurisdicional têm três vertentes. São elas: a institucional, a estrutural e a relativa aos procedimentos. As duas primeiras para serem efetivamente atacadas necessitam que se tenha uma efetiva reforma do Judiciário, com alterações constitucionais. A vertente procedimental tem

sido objeto de intervenções pontuais. O Estado brasileiro tem optado por modificações em dispositivos específicos do CPC a partir de trabalhos de grupo de juristas, ao invés de realizar uma grande revisão no Código, já próximo de alcançar trinta anos de vigência. As alterações tópicas se por um lado são menos traumáticas, por vezes, tem um lado negativo que é o da corrosão dos pilares do código de 1973.

O direito de ação, ou seja, o direito de acesso à justiça é consagrado no Artigo (art.) 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), decorrente de pressões de movimentos políticos e sociais em expansão no século XX, conforme denota Bueloni Júnior (*site UNIMEP*), e este quer ser exercido pela sociedade contemporânea com resultados rápidos e efetivos. Consagram Mendonça e Florentino (2005, p.180) que o direito de ação compreende a faculdade conferida a todos de postular tutela jurisdicional de natureza preventiva ou reparatória em relação a qualquer direito, tanto individual quanto coletivo. Englobando tudo isso, Milhoranza (apud Tesheiner e Viafore, 2011, p. 20) assegura que este é o direito supremo por ser o direito de efetivar os próprios direitos.

Como aplica Patu Júnior (*site TJPE*), é inconcebível em um mundo tecnológico, em que a atividade humana está toda conexa, que um processo dure mais de anos, ou décadas, para ser julgado. Percebe-se certo anacronismo entre o Judiciário e a globalização: de um lado o engessamento e o formalismo exacerbado; do outro, a informação rápida, a resolução com um clique.

É neste impasse que surge o descrédito do povo para com o seu exercício de direito. Fora isto, com a mundialização, consequência natural da facilidade de informação e relacionamento em diversos campos, acaba por suscitar conflitos em diversas searas. Ademais, criou-se no Brasil uma “cultura de sentença” em que a solução é adjudicada dos conflitos, com a ampliação do número de recursos e conseqüentemente o entrave nas Varas, devendo-se passar para a “cultura da pacificação”, pelo que aponta Watanabe (2011, p.4-9). Bacellar (2011,p.31) afirma que o início da reforma tem que ser no ensino jurídico, o qual preza pelo sistema da contradição, da dialética, formando profissionais polarizados.

Para a maior compreensão da crise no judiciário, deve-se ter em mente o que é de fato o acesso à justiça e as soluções apontadas pela doutrina e jurisprudência.

2.1 Conceituação da expressão acesso à justiça

Pela ideia apresentada por Nunes (*site FGV*), a expressão “acesso à justiça” é de complexa explicação, uma vez que se amolda ao paradigma de cada período por ser um

direito fundamental, sendo influenciada por elementos políticos, religiosos, sociológicos e filosóficos. A autora exemplifica com

Basta perquirir o pensamento da sociedade *laissezfaire*, em que o acesso à justiça se resumia ao direito formal do indivíduo propor uma ação, independente de condições paratanto. O acesso à justiça correspondia, assim, a uma igualdade formal, mas não efetiva. Não obstante, tal conceito individualista foi paulatinamente extirpado pelas sociedades modernas, que passaram a reconhecer os direitos e deveres sociais do governo. O Estado passou a ter uma nítida atuação positiva, como instrumento de resguardo dos direitos sociais básicos. Nesse sentido, o acesso à justiça tem sido progressivamente reconhecido, não apenas como um direito fundamental, mas como o ponto nodal da moderna processualística.

Como se vê, e explicita nitidamente Menezes (*site* JUS NAVEGANDI), aos direitos fundamentais não se pode dar uma definição universal e atemporal, vez que são valores essenciais do homem e se formulam com o passar do tempo em consonância com a noção de Estado por serem culturalmente construídos.

Pelas lições de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8), esta expressão delinea o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado, devendo àquele ser a todos indistintamente alcançável, efetivo, e este gerar consequência justa no âmbito individual e social. Pelo entendimento de Mendonça e Florentino (2005, p. 27-28), muito embora este conceito tenha sido construído há certo tempo, a essência dele não muda:

A natureza de servir à delimitação dos objetivos fundamentais do sistema jurídico constituído e de proporcionar para todas as pessoas a faculdade de perseguir a efetividade dos seus direitos através de instrumentos ampla e isonomicamente acessíveis, mediante a tutela estatal individual e socialmente justa.

É, portanto, garantia de cidadania nas sociedades modernas e esta não se restringe aos meios judiciais de composição, requerendo-se uma legislação apta a diminuir as desigualdades e ampliar o ingresso, além de uma estruturação com proporcione meios da Lei sê-la aplicada ao mundo fático-social e seus ideais de justiça. Assim, nos dizeres do doutrinador Marinoni (1994, p.11),

As palavras chaves para esta nova concepção social de justiça e de lei têm sido efetividade do acesso: acesso para todos ao sistema legal, aos seus direitos, liberdade e benefícios; acesso aos instrumentos, incluindo os tribunais, que possam fazer valer aqueles direitos, liberdades e benefícios de forma significante e efetiva.

Como bem explana Watanabe (2011, p.4), não é apenas em relação aos órgãos judiciários, mas o acesso à ordem jurídica justa, incluindo qualquer problemática jurídica, mesmo que não seja conflito de interesse, cabendo uma atenção por parte do Poder Judiciário.

2.2 Barreiras impostas para o acesso à justiça

Na sua obra, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 15) revela que para superar as barreiras e ter um efetivo acesso à justiça seria preciso uma “igualdade de armas” definida como a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Só que além de abstrata, esta possibilidade necessita de um amplo aprofundamento na questão econômica, social e cultural, ou seja, são aspectos imateriais que permeiam estas definições.

O fato econômico interfere tanto no Estado que terá que investir na estrutura e pagamento de pessoal quanto no indivíduo por pagar honorários advocatícios e custas procedimentais cujo valor é alto e pela demora muitas pessoas nem acionam a justiça ou aceitam acordos insuficientes. Pelo que defende Scheer (2006, p. 283), até o fator econômico intimida para iniciar a provocação jurisdicional, fora o princípio da sucumbência, estando em privilégio a pessoa que possui mais por suportar as custas e o tempo processual.

Já pelo fator sócio-cultural, as pessoas de baixa renda possuem certo receio de ir ao judiciário, principalmente por não saber quais são os seus direitos, ou seja, a desinformação gera a inércia das pessoas.

2.3 Ondas de solução prática para o acesso à justiça

Com a constatação de que o processo não estava conseguindo alcançar sua finalidade social, jurídica e política, que de forma geral é a pacificação da sociedade com justiça, Cappelletti e Garth observaram que o direito processual passou por transformações para a efetivação do acesso à justiça e estabeleceram ondas do movimento.

A primeira onda renovatória consiste, para Cintra, Grinover e Dinamarco (1999, p. 93), em estudos para melhoria da assistência judiciária aos necessitados. Consoante explicita Gomes Neto (2005, p.62), quanto maior o desenvolvimento do sistema jurídico contemporâneo, maior será a necessidade de um advogado para auxiliar a parte. Na obra de Cappelletti e Garth, (1988, p. 32), há a referência que

Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio do advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas

e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que não podem custear são, por isso mesmo, vitais.

Seria, na expressão de Gomes Neto, o obstáculo econômico, vez que as pessoas menos favorecidas não podem acionar o judiciário pelo alto custo do processo ou pelo desconhecimento da norma por ser a pobreza, como observa Cappelletti (apud Gomes Neto, 2005, p. 64), apenas econômica, como também cultural. De acordo com Paula (2002, p.98-99), é necessário um incremento econômico para assim ter a democracia e permitir que os figurantes de classes sociais possam disputar as mesmas oportunidades.

Vale ressaltar, pela análise de Nunes (*site FGV*), que por muito tempo o auxílio judicial aos pobres era encarado como questão de caridade, instituída até em ordenamentos, sendo finalizada com a Revolução Francesa e a extinção dos privilégios de assistência à jurisdição e gratuidade da administração dos juizes. Apenas no Estado Social e de Direito é que se volta a assegurar formal e materialmente o direito de ação.

Dentro desta onda Cappelletti (1988, p. 38), enfatiza sobre o *sistema judicare*, com aparecimento no século XX, na Alemanha e na Inglaterra, em que os advogados particulares, cujos nomes estão numa lista, são pagos pelo próprio Estado para advogar em favor de quem era legalmente declarado como pobre, tecendo a crítica de que é muito difícil a ele reconhecer a causa e procurar auxílio para além do que do qual não lhe é familiar.

Depois revela o advogado remunerado pelos cofres públicos com escritório em área carente, como surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, com algumas características do sistema anterior, com a denominação de “escritórios de vizinhança” (*Neighbourhood Law Centres*), com a problemática do recurso escasso estatal, do alto número processual e poucos advogados. Houve ainda a combinação dos dois sistemas anteriores em na Suécia, Austrália, Canadá e Holanda por ver a limitação de cada um.

Sabe-se que no Brasil há o advogado dativo, os liberais cadastrados na Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB) municipal, os que apenas receberão o valor sucubencial e os defensores públicos que agem, pela consagração do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, ao dispor que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (*site PLANALTO*). Esta comprovação se dá pelo fato da pessoa não poder prejudicar ou sustentar a si próprio ou a sua família ao pagar as custas judiciais e honorários advocatícios, pela compreensão da Lei nº 1.060/50, em seu art. 2º, parágrafo único.

A segunda onda busca a justiça de interesses públicos. É através da representação de direitos coletivos, de ações de sociedades de classe e de interesse público para garantia dos interesses difusos, rompendo a postura individualista do processo em que o processo só poderia ter por figuração duas partes. Nunes (*site FGV*) afirma que

Antigamente, discutia-se que se o interesse pertencia a todos significava que não pertencia a ninguém. Entretanto, paulatinamente, observou-se que se o direito não pertencia a ninguém é porque pertencia a todos. Assim, passou-se a buscar meios adequados para a tutela dos interesses transindividuais, até então não apreciadas pelo processo civil. Nesse contexto, surgiram reformas na esfera processual, mormente nos institutos da *legitimidade ad causam* e da coisa julgada.

Com isto, mudanças processuais tiveram que ser feitas para adequação a esta nova dimensão. Scheer (2006, p. 284-285) expõe que esta onda obriga a cogitar uma remodelação do padrão de antagonismo entre partes individuais para proteção de interesses coletivos, como o Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º, LXX, CF/88), Ação Civil Pública (art. 129, III, CF/88) e Ação Popular (art. 5º, LXXIII, CF/88), muito embora ainda haja empecilhos para a consolidação destes institutos. Sobre este assunto, Cappelletti e Garth (1988, p.50/51) esboçam que

As reformas discutidas a seguir são a prova dos resultados das rápidas mudanças que caracterizaram essa fase. Verifica-se um grande movimento mundial em direção ao que o Professor Chayes denominou litígios de “direito público” em virtude de sua vinculação com assuntos importantes de política pública que envolvem grandes grupos de pessoas. Em primeiro lugar, com relação à legitimidade ativa, as reformas legislativas e importantes decisões dos tribunais estão cada vez mais permitindo que indivíduos ou grupos atuem em representação dos direitos difusos.

Em segundo lugar, a proteção de tais interesses tornou necessária uma transformação do papel social do juiz e de conceitos básicos como a “citação” e o “direito de ser ouvido”. Uma vez que nem todos os titulares de um direito difuso podem comparecer a juízo – por exemplo, todos os interessados na manutenção da qualidade do ar, numa determinada região – é preciso que haja um “representante adequado” para agir em benefício da coletividade, mesmo que os membros dela não sejam “citados” individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva, a decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra mudança tradicional, a de coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir a proteção judicial efetiva dos interesses difusos. A criação norte-americana da *class action*, abordada a seguir, permite que, em certas circunstâncias, uma ação vincule os membros ausentes de determinada classe, a despeito do fato de eles não terem tido qualquer informação prévia sobre o processo. Isso demonstra as dimensões surpreendentes dessa mudança no processo civil. A visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, e o melhor, está se fundindo com uma concepção social, coletiva. Apenas a transformação pode assegurar a realização dos “direitos públicos” relativos a interesses difusos.

A terceira onda estabelecida por Cappelletti e Garth (1988, p. 67-71), visa ampliar a concepção de acesso à justiça com a introdução da advocacia judicial e extrajudicial

por intermédio de advogados públicos ou particulares, como também reformas no procedimento, na estrutura de tribunais ou criação de novos, uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, meios de privados ou informais para solução de litígio. Mostra-se, nesta última, a busca pela mediação ou conciliação. O autor esclarece que (1988, p. 88)

Essa ideia decerto não é nova: a conciliação, arbitragem e mediação foram sempre elementos importantes em matéria de solução de conflito. Entretanto, há um novo elemento consistente em que as sociedades encontraram novas razões para preferir tais alternativas.

O autor enfatiza que é realmente preciso um incentivo a esta solução fora do tribunal, que pode ser obrigatória ou não a depender do assunto demandando, ou ainda disponível para as partes. Alega o Ovídio Baptista da Silva (apud Tesheiner e Viafore, 2011, p.26) que o problema é funcional e não estrutural, mas que há uma acomodação no que acontece que impede a compreensão. Assim, como solução, Watanabe (2011, p.5-6) refere-se a uma política pública judiciária atuando como filtro da litigiosidade a fim da diminuição do congestionamento do judiciário, sendo o nascimento de uma nova cultura de coesão social.

2.4 A terceira onda: a consolidação da mediação e conciliação em prol do acesso à justiça

Ao descrever o chamado movimento de *acesso à justiça*, ele percebe a existência de três ondas, a última justamente comprometida com uma *concepção mais ampla de acesso*, realizando uma revolução copérnica na discussão sobre o tema e adotando-se concretamente os meios alternativos, por Da Silva (*site ÂMBITO JURÍDICO*). Gomes Neto (2005, p. 95) diz que a terceira onda é a chamada justiça coexistencial para elencar a mediação e conciliação, referindo-se a conflitos mais simples, normalmente cujo objeto são relações com aproximação e duradoura, vez que não é bom ter vencidos e vencedores em relacionamentos longos, sendo primordial uma recíproca compreensão, uma modificação bilateral ou multilateral dos comportamentos e das pretensões.

É uma simplificação do procedimento em benefício à justiça social por ser inconcebível um processo rápido e eficaz com o processo em si atual, sendo, o princípio da adaptabilidade processual de acordo com as peculiaridades de cada feito.

O que se quer demonstrar é que o procedimento tem que estar condizente com o que se almeja, ou seja, a complexidade ou não da solução tem que ensejar em procedimento com

mais ou menos etapas. O que se tem hoje, por Watanabe (2011, p.3), é uma falta de política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na sociedade. Nesta visão insere-se a mediação e conciliação para resolver problemas menos complexos. Como observam Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p.71-72):

Ademais, esse enfoque reconhece a necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo de litígio. Existem muitas características que podem distinguir um litígio de outro. Conforme o caso, diferentes barreiras ao acesso podem ser mais evidentes, e diferentes soluções, eficientes. Os litígios podem diferir em sua complexidade. É geralmente mais fácil e menos custoso resolver uma questão simples de não-pagamento, por exemplo, do que comprovar uma fraude. Os litígios também diferem muito em relação ao montante da controvérsia, o que frequentemente determina quanto os indivíduos (ou a sociedade) despendem para solucioná-los. Alguns problemas serão bem mais “resolvidos” se as partes simplesmente se “evitarem” uma à outra. A importância social aparente de certos tipos de requerimentos também será determinante para que sejam alocados recursos para sua solução. Além disso, algumas causas, por sua natureza, exigem solução rápida, enquanto outras podem admitir longas deliberações.

Com todo este apoio doutrinário, o Six (apud Almeida, 2000, p. 28) relata que a mediação vai de encontro ao que preza a globalização por estimular o pessoal, estabelecendo uma conexão com a cultura e sistema legal do país que será aplicada.

Nesse sentido de reforma e neste impasse, veio o retorno ao incentivo da mediação e conciliação, como meio de estimular, difundir e educar as partes por meio da comunicação pelo que explana Azevedo (2013, p.17) que será analisado neste trabalho nos capítulos seguintes.

3 A MEDIAÇÃO: A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Com a instituição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004, muitas foram as medidas adotadas para concretizar suas atribuições, quais sejam, basicamente, controlar a atuação administrativa e financeira do poder judiciário, bem como o cumprimento funcional dos juízes. Só que além destas imputações, esse órgão se viu designado a criar meios de amenizar a crise instalada no judiciário pela quantidade de processos ajuizados *versus* sentenciados nas varas, uma vez que os brasileiros acham que as duas únicas formas de resolver conflitos são a autotutela, que não se pode usá-la mais e ainda há muitos relatos, ou a transferência para o juiz dar a última palavra de quem está “certo” ou “errado”.

Assim, foram estipulados meios sem rivalidade de solução de conflito com a proposta de política pública estabelecida pela Resolução (Res.) nº 125, de 29 de novembro de 2010 do CNJ, de acordo com CAHALI (2011, p.40). Ela introduz a mediação e a conciliação judiciais a serem implementadas nos tribunais nacionais como forma adequada de tratamento de algumas matérias demandadas no Judiciário. Estes dois institutos foram consagrados pela probabilidade de maior efetividade na resolução consensual, buscando a forma mais sincera de solução de conflitos por ser do introspecto do homem a pacificação (PETÔNIO CALMON, 2007, p.32).

3.1 Diferença entre mediação e conciliação

Primeiramente, deve-se observar a diferença entre a mediação e a conciliação, já que, segundo Bonafé-Schmitt (1999 apud AVILA,2008, p. 106-107), nos países latinos, pode-se observar certa celeuma terminológica.

A mediação, como esclarece a Carla ZamithBoin Aguiar (2009, p. 94-102), é um trabalho realizado por um terceiro neutro que avalia as informações dadas por duas partes para, a partir delas, criar a verdade intermediária através do equilíbrio e da igualdade. Desta forma, entende-se que o mediador será envolvido pelos relatos e, pela utilização de técnicas aprendidas em capacitações, irá construir a solução com e pelas partes daquela relação conflituosa.

Não há imposição ou julgamento, não há busca pela verdade formal basilares do processo civil, mas a análise do que cada polo descreve e a facilitação da comunicação com intuito de que ele mesmo chegue à solução mais benéfica. Percebe-se aqui a nítida diferença com o processo civil, como delinea Sales (apud Gonçalves da Silva, 2006, p. 14)

O que se percebe durante o processo judicial é somente o diálogo entre os advogados, juízes e promotores de justiça, buscando uma solução para os problemas que se encontram nos autos processuais. As partes, reais interessadas na questão, pouco são ouvidas, causando insatisfações reprimidas que resultam em novas lides, mesmo após decisão judicial daquele processo. A decisão judicial fundamenta-se exclusivamente no processo, seguindo a falsa máxima 'o que não está no auto não está no mundo'. Desta forma, em muitos casos, os reais problemas, os aspectos relevantes da questão não são estudados. A decisão judicial, portanto, resta insatisfatória, dificultando o seu cumprimento e ainda produzindo mais impasses.

Assim, como alega Gonçalves da Silva(2006, p. 17), a polarização de quem “ganha a causa” não quer dizer que necessariamente o conflito esteja resolvido, sendo a mediação

justamente pelo oposto. É método confidencial em que se busca mostrar a origem real do conflito, redimensioná-lo, em que cada um precisa ceder um pouco, em uma postura colaborativa, para ambos ganharem. Percebe-se que este meio de solução da lide é uma forma de facilitar o diálogo que, por algum problema, não está sendo eficaz.

Insta colocar que, de acordo com Almeida (2000, p. 29), a característica cultural do brasileiro é pautar suas relações em emoções. Condizente com isto, a finalidade maior deste procedimento é reestruturar o relacionamento entre as partes por reflexões sobre cada posicionamento, validando emoções, interesses e perspectivas, de modo que haja uma pacificação, ou seja, extinção do conflito pela própria manifestação das partes, uma vez que este meio é mais utilizado em confusões cujo vínculo tende a permanecer por muito tempo, como divórcio, inadimplemento de prestações entre pessoas próximas, guarda de filhos, dívidas condominiais, pensão alimentícia, parceria comercial ou societária. Nota-se que a composição não é a finalidade em si, muito embora se tente obtê-la.

Já a conciliação o terceiro imparcial, na concepção de CAHALI (2011), irá sugerir, dentro do equilíbrio, viabilidade e razoabilidade, as que melhores propostas com a finalidade de se obter um acordo. Aqui o conciliador irá manifestar seu posicionamento em relação ao exposto para a solução do caso, sendo bem aplicado em acidentes de trânsito e relações de consumo.

Faz-se mister ressaltar que tanto a mediação quanto a conciliação podem ser feitas extra ou judicialmente que, conforme Six(p. 28-35, 2001), respectivamente, mediação institucional (imposta burocraticamente de cima para baixo) ou monárquicas e mediações cidadãs (espontaneamente surgidas de grupos sociais). A extrajudicial, clássica, será praticada por algum mediador/conciliado capacitado, no âmbito privado, da confiança de ambos para auxiliá-los. Já na judicial, pertencerá a lista ao Tribunal de Justiça, podendo ser escolhido pelas partes dentre os disponíveis ou o que for sorteado pelo sistema automaticamente.

3.2 Idealização da Resolução nº 125/2010 do CNJ

O ministro Antônio Cezar Peluso (*site* STF JUS), na sua posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, em 23 de abril de 2010, discursando sobre a perda da credibilidade pela população em relação ao judiciário, principalmente devido à morosidade em transitar em julgado uma sentença, afirmou que:

Ora, as rápidas transformações por que vem passando, sobretudo nas últimas décadas, a sociedade brasileira, tem agravado esse quadro lastimável, em virtude da simultânea e natural expansão da conflituosidade de interesses que, desaguando no Poder Judiciário, o confronta com sobrecarga insuportável de processos, em todas as latitudes do seu aparato burocrático. E uma das causas proeminentes desse fenômeno está, como bem acentua o Desembargador Kazuo Watanabe, na falta de uma política pública menos ortodoxa do Poder Judiciário em relação ao tratamento dos conflitos de interesses.

O mecanismo judicial, hoje disponível para dar-lhes resposta, é a velha solução adjudicada, que se dá mediante produção de sentenças e, em cujo seio, sob influxo de uma arraigada cultura de dilação, proliferam os recursos inúteis e as execuções extremamente morosas e, não raro, ineficazes. É tempo, pois, de, sem prejuízo doutras medidas, incorporar ao sistema os chamados meios alternativos de resolução de conflitos, que, como instrumental próprio, sob rigorosa disciplina, direção e controle do Poder Judiciário, sejam oferecidos aos cidadãos como mecanismos facultativos de exercício da função constitucional de resolver conflitos. Noutras palavras, é preciso institucionalizar, no plano nacional, esses meios como remédios jurisdicionais facultativos, postos alternativamente à disposição dos jurisdicionados, e de cuja adoção o desafogo dos órgãos judicantes e a maior celeridade dos processos, que já serão avanços muito por festejar, representarão mero subproduto de uma transformação social ainda mais importante, a qual está na mudança de mentalidade em decorrência da participação decisiva das próprias partes na construção de resultado que, pacificando, satisfaça seus interesses.

Ao começar seu trabalho, o presente Ministro, respaldado pelo projeto do Professor Kazuo Watanabe, instituiu um comitê designando os magistrados José Guilherme Vasi Werner, Sidmar Dias Martins, Tatiana Cardoso de Freitas, Mirella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira e Valéria Ferioli Lagrasta Luchiaripara elaboração desta nova forma de solucionar conflitos. Esta última elaborou a minuta, a qual foi analisada pelo Comitê Gestor de Conciliação (LUCHIARI, p.229-231, 2011). Após sua aprovação em 29 de novembro de 2011, a Res. Nº 125/2010 do CNJ fora publicada em 1º de dezembro de 2010, sobre “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário”. De acordo com Professor Kazuo Watanabe (*site TRF4*), principal idealizador desta nova sistemática, revela que:

O objetivo primordial que se busca com a instituição de semelhante política pública, é a solução mais adequada dos conflitos de interesses, pela participação decisiva de ambas as partes na busca do resultado que satisfaça seus interesses, o que preservará o relacionamento delas, propiciando a justiça coexistencial. A redução do volume de serviços do Judiciário é uma consequência importante desse resultado social, mas não seu escopo fundamental.

Conclui-se que é o início da quebra de um paradigma social que está em questão: a modificação cultural de necessitar de uma sentença para a elaboração de um acordo, com análise do que seria mais favorável para aquele específico problema.

Da leitura do texto desta Resolução com as ideias intrínsecas para sua formação, subentende-se que os principais objetivos são a consolidação de uma maior efetividade do acesso à justiça justa, apreciada no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 (*site PLANALTO*) associada a esta mudança cultural de pacificação social, tendo como principal consequência uma possível solução para a crise do judiciário.

3.2.1 Análise da Resolução sob perspectiva da fixação da mediação nos tribunais brasileiros

A partir deste ato do CNJ, em seu Capítulo II , aos Tribunais foi atribuída a implantação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, além da inclusão da capacitação dos mediadores/conciliadores, portal de acesso pela internet com informações especiais e dados estatísticos.

Tudo isto será seguido pelas diretrizes impostas pelo CNJ, o qual será o elo dos órgãos do Poder Judiciário, das entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino para o êxito do projeto, como também o *modus operandi* da capacitação e avaliação dos conciliadores/mediadores e incentivos a fim de promover uma uniformização (*site CNJ*).

Os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, em cada Tribunal, conforme o art. 7º, da Res. nº 125/2010 do CNJ (*site CNJ*), são formados por magistrada ativa ou aposentados e servidores, os quais, preferencialmente, devem possuir conhecimento nesta forma de resolução de litígio. Assim, este órgão será o responsável pela organização e concretização desta política e sua finalidade, consolidando vínculo com outros tribunais, com instituições educacionais, a Subseção de OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradorias, Poder executivo e empresas para estimular a autocomposição destas, como bem explanou Luchiari (p. 234-235, 2011).

De acordo com Nogueira (p. 252-253, 2011), estes núcleos são verdadeiros “centros de inteligência”, já que são os que desenvolverão objetivos adequados à realidade local, com nexos nas diretrizes gerais do CNJ, e as formas para seguir a implantação e o êxito a fim de haja um maior planejamento, centralização, aprimoramento e uniformização nas práticas de autocomposição pelos Tribunais.

Agregado a isto, os Núcleos e Centros Judiciários De Solução De Conflitos E Cidadania, consagrados no art. 8º, *caput*, da Res. nº 125/2010 do CNJ (*site* CNJ), são unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão, com atuação nas matérias cíveis, fazendárias, previdenciárias, de família e Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, no âmbito estadual e federal.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto no trabalho, entende-se que há uma preocupação do CNJ - à medida que tornou obrigatória a inserção da mediação e conciliação nos Tribunais de angariar o direito de ação a todos os cidadãos com as reformas tanto legislativas quanto estruturais.

Observa-se que ainda há uma desordem prática, desde o início da utilização dos meios alternativos no Brasil, quanto à diferenciação dos institutos da mediação, propositos de reestabelecimento comunicação para que eles encontrem uma solução a ser tomada, e conciliação, apesar de não decidir de fato, é influenciador direto na decisão a ser feita ao palpitar ou sugerir, e suas finalidades, devendo ser estabelecido o seu diferencial para consolidação da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, ou seja, efetividade do acesso à justiça.

Logo, devem-se criar meios para o esclarecimento destes métodos não adversariais a fim de validar a mudança paradigmática da cultura da sentença deve ser proposto pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, principalmente com campanhas e propagandas em meios de comunicação cujo acesso seja irrestrito.

Sabe-se que a mediação e a conciliação não é a solução para todos os problemas relativos ao direito de ação, mas, com certeza, sua aplicação ajustada entre os casos práticos e preconizado pelos doutrinadores significa um progresso para harmonização social, por trazer o resgate da comunicação entre cada parte, além de fazer com que cada um seja consciente das responsabilidades impostas pelo acordo.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Carla ZamithBoin. **Mediação e justiça**: a humanização do sistema processual como forma de realização dos princípios constitucionais. São Paulo: QuartierLatin, 2009.

ALMEIDA, Giselle Groeninga. Mediação: Além de um Método para a compreensão das demandas judiciais do direito de família – a experiência brasileira. **Revista Brasileira de Direito de Família**. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, V.2, Nº 7, p. 19-37, out/dez, 2000.

ALMEIDA, Giselle Groeninga. Mediação: Além de um Método para a compreensão das demandas judiciais do direito de família – a experiência brasileira. **Revista Brasileira de Direito de Família**. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, V.2, Nº 7, p. 19-37, out/dez, 2000.

ANDREWS, Neil. Mediação e arbitragem na Inglaterra. **Revista de Processo**. São Paulo, ano 37, v.211, p.281-315, set. 2012.

ARAKEN ASSIS apud TESHEINER, José Maria Rosa; VIAFORE, Daniele. Da Proposta de “Redução do Número de Demandas e Recursos” do Projeto de Novo CPC Versus Acesso à Justiça. *Revista Jurídica Síntese*. São Paulo: ano 58, nº 401, p. 11-29, fevereiro de 2011.

AVILA, Eliedite Mattos. Mediação familiar: mitos, realidades e desafios. **Revista de Direito Privado**. São Paulo: ano 9, n. 35, p. 97-114, jul./set., 2008.

AZEVEDO, André Gomma (org). **Manual de mediação judicial**. Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2013. 4ª edição. Disponível

em:<<http://www.takaconsultoria.com.br/site/images/tools/MediacaoJudicial.pdf>>. Acesso em : 01 de outubro de 2013 às 13:27.

BACELLAR, Roberto Portugal. **Centrais De Conciliação, Mediação E Arbitragem Do Poder Judiciário Do Estado De Pernambuco** (Resolução TJPE nº 222/2007, de 04.07.2007). 2009. Trabalho - Escola Superior Da Magistratura De Pernambuco “Desembargador Cláudio Américo De Miranda” – ESMAPE Disponível em: <<http://www.tjpe.jus.br/documents/88944/92981/2009-7-9-11-57-Centrais+de+Concilia%C3%A7%C3%A3o%20Media%C3%A7%C3%A3o+e+Arbitragem+do+Poder+Judici%C3%A1rio+do+Estado+de+Pernambuco.pdf/bdc94957-e3d7-45a5-92e3-1f9d534aa834>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 17h47.

BEZERRA CAVALCANTI, Francisco de Queiroz. **Inovações no processo civil em matéria recursal**. Considerações sobre a Lei nº 10.352/01. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/2577/inovacoes-no-processo-civil-em-materia-recursal>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 14:08 .

BUELONI JÚNIOR, WladyrBenedicto. **Acesso À Justiça E Juizado Especial Cível: Pontos Conflitantes Entre A Teoria E A Realidade**. Acesso em: <<https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/2006/KTQIXWGFSQGV.pdf>>. Disponível em: 01 de outubro de 2013 às 14:11.

CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

CALMON, Petronio. **Fundamentos da mediação e da conciliação**. Rio de Janeiro, Forense, 2007.

CAPPELLETTI, Mauro; Garth, Bryant. **Acesso à justiça**. NORTHFLEET, Ellen Gracie (trad.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988.

Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 30/05/2016 às 16h09.

DA SILVA, Eduardo Silva. **Meios Alternativos de Acesso à Justiça**: fundamentos para uma Teoria Geral. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2204. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 14:04.

FARINELLI, Alison; CAMBI, Eduardo. Conciliação e mediação no novo código de processo civil (PLS 166/2010). **Revista de Processo**. São Paulo: ano 36, v. 194, p. 277-305, abril, 2011.

GOMES NETO, José Mário Wanderley. **Acesso à Justiça em Mauro Cappelletti**: análise teórica desta concepção como “movimento” de transformação das estruturas do processo civil brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005.

GONÇALVES DA SILVA, Luciana Aboim Machado. A Mediação como Instrumento de Acesso à Justiça. **Revista IOB Trabalhista e Previdenciária**. Porto Alegre: Síntese, v. 17, nº 201, p. 12-20, março de 2006.

GRINOVER, Ada Pellegrini *at alii*. **Teoria Geral do Processo** São Paulo: Malheiros, 1999.

LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Comentários da Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010. In: GROSMAN, Frankel Claudia; MANDELBAUM, Helena Gurfinkel (Coord.). **Mediação no judiciário**: teoria na prática e prática na teoria. São Paulo: Primavera Editorial, 2011.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Efetividade do processo e tutela de urgência**. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1994.

MENDONÇA, J.J Florentino Santos; FLORENTINO, Deluse Amaral Rolim. **Instrumento para a efetivação do Acesso à Justiça**. Recife: Bagaço, 2005.

MENEZES, Priscila Cunha de Lima de. **Comissões de conciliação prévia e acesso à justiça**. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23936/comissoes-de-conciliacao-previa-e-acesso-a-justica/2#ixzz2ebe0AtCE>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 14:14.

MILHORANZA *apud* TESHEINER, José Maria Rosa; VIAFORE, Daniele. Da Proposta de “Redução do Número de Demandas e Recursos” do Projeto de Novo CPC Versus Acesso à Justiça. **Revista Jurídica Síntese**. São Paulo: ano 58, nº 401, p. 11-29, fevereiro de 2011.

NOGUEIRA, Mariella Ferraz de Arruda Pollice. Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflito. GROSMAN, Frankel Claudia; MANDELBAUM, Helena Gurfinkel (Coord.). **Mediação no judiciário**: teoria na prática e prática na teoria. São Paulo: Primavera Editorial, 2011.

NUNES, Maria Júlia Tavares Do Carmo Pinheiro. **O ACESSO À JUSTIÇA E OS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS: PARA ALÉM DO BEMESTAR SOCIAL**. Disponível em: <<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.georgemlima.xpg.com.br%2Fjulia.doc&ei=954wUuqFIuOO2wWdpOGAAw&usq=AFQjCNHixs965I5wso7VK2D3MlvXtY2fHg&sig2=5CAtpR0DgFkbPI5AVXQEJQ&bvm=bv.51773540,d.b2I>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 14:18

OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA *apud* TESHEINER, José Maria Rosa; VIAFORE, Daniele. Da Proposta de “Redução do Número de Demandas e Recursos” do Projeto de Novo CPC

Versus Acesso à Justiça. Revista Jurídica Síntese. São Paulo: ano 58, nº 401, p. 11-29, fevereiro de 2011.

PATU JUNIOR, Ruy Trezena. Conciliação e arbitragem: soluções para o problema da morosidade da justiça no Brasil. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco. Recife: Faculdade de Direito do Recife, 1999. Disponível em: <http://www.tjpe.jus.br/concilia/publicacoes/2009-6-15-14-21-Conciliação%20e%20Arbitragem%20-%20Soluções%20Para%20o%20Problema%20da%20Morosidade%20da%20Justiça%20no%20Brasil.pdf>>. Acesso em 04/03/2013 às 13:30.

PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. **A jurisdição como elemento de inclusão social: revitalizando as regras do jogo democrático**. São Paulo: Manole, 2002.

Posse na presidência do Supremo Tribunal Federal: Ministro Antonio Cezar Peluso, Presidente; Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, Vice-Presidente: sessão solene realizada em 23 de abril de 2010– Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2010. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalPossePresidencial/anexo/Plaqueta_de_Posse_na_Presidencia_Min._Cezar_Peluso.pdf>. Acesso em:04 de maio de 2013 às 15h43

RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007,do **Conselho Nacional de Justiça**. Disponível em:<<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12090-recomenda-no-8>> Acesso em: 05 DE MAIO DE 2013 ÀS 18H29.

Resolução 6 do CNJ. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12120-resolu-no-6-de-13-de-setembro-de-2005>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 17:33.

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>>. Acesso em: 04 de maio de 2013 às 16h00.

RESOLUÇÃO Nº 222 DE 04/07/2007 (DOPJ 10/07/2007) do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Disponível em:<http://www.tjpe.jus.br/noticias_ascomSY/arquivos/2012_02_02_Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA%20222%20-%20atualizada%20pela%20res%20287.pdf>. Acesso em 05 de maio de 2013 às 19h11.

RIO ALVES, Francisco Luís. **Processo eletrônico no juizado especial e a ampliação do acesso à justiça**. Disponível em: <<http://www.jfpe.jus.br/internet/esmafe/publicacoes/documentos/paperDrFranciscoLuisRios.pdf>>. Acesso em: 01 de outubro de 2013 às 14:00

SALES, Lília Maia de Moraes. Justiça E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. In: GONÇALVES DA SILVA, Luciana Aboim Machado. A Mediação como Instrumento de Acesso à Justiça. **Revista IOB Trabalhista e Previdenciária**. Porto Alegre: Síntese, v. 17, nº 201, p. 12-20, março de 2006.

SCHEER, Milene de Alcântara Martins. A Dimensão Objetiva do Direito Fundamental ao Acesso à Justiça e a Efetividade da Norma Constitucional. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: **Editora Revista dos Tribunais**, ano 14, nº 54, p. 282-290, janeiro-março, 2006.

SIX, Jean François. Dinâmica de mediação. ALMEIDA, Giselle Groeninga de; BARBOSA, Águida, Arruda; NAZARETH, Eliana Riberti (trad.). Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

TESHEINER, José Maria Rosa; VIAFORE, Daniele. Da Proposta de “Redução do Número de Demandas e Recursos” do Projeto de Novo CPC Versus Acesso à Justiça. **Revista Jurídica Síntese**. São Paulo: ano 58, nº 401, p. 11-29, fevereiro de 2011.

WATANEBE, Kazuo. Política pública do poder judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesse. In: PELUSO, Antonio César; RICHA, Morgana de Almeida (Coord.). **Conciliação e mediação**: estrutura da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011.